

PANDEMIA, SUFRIMIENTO Y EPISTEMOLOGÍA POLÍTICA

Andrea GREPPI*

I

La tentación más fuerte para cualquiera que acaba de pasar un mal trago y ve la luz al final del túnel es pensar que no ha pasado nada, que todo vuelve a estar igual de bien o igual de mal que antes. Ese mismo mecanismo psicológico entra en juego cuando tenemos la sensación de que no nada hay más intenso, ni más dulce, que el paisaje después de la tormenta. Pero que la tragedia haya terminado, que nuestros sentidos vuelvan a producir la imagen de la normalidad, no nos autoriza a reducir la experiencia vivida a un paréntesis que se abre y se cierra, como el espacio escénico cuando el telón sube o baja. La pandemia no es teatro. El intento por escamotear lo que está en medio, por desplazar el lugar comprendido entre los dos opuestos arcos del paréntesis hacia un orden de discurso que a nosotros no nos incumbe directamente, salvo como un mal sueño, o como hipótesis, está destinado al fracaso y produce sufrimiento. Viceversa, la fidelidad a la marca indeleble del trauma produce relatos igualmente desenfocados, ciegos a la multiplicidad de las evidencias, donde el tiempo se comprime hasta que hechos empiezan a volverse irreconocibles y la tragedia queda reducida a sus puras causas naturales, como si de un maremoto o de la caída de un meteorito se tratara. La reiteración obsesiva de la experiencia traumática también produce sufrimiento.

* Universidad Carlos III de Madrid, España.

Mi propósito en estas páginas no será, evidentemente, mediar entre narraciones defectuosas y contar la “verdadera” historia de la pandemia. Me conformo con señalar algunos aspectos muy particulares de la experiencia vivida que tienen, a mi juicio, una particular relevancia política. La intuición de partida es que, en un caso tan dramático, hay mucha más “política” de la que parece. O de la que se quiere reconocer. Y que el simple acto de poner en evidencia esta circunstancia, frente al desinterés o, peor, frente al interés por entregar al olvido una parte importante de lo sucedido, es por sí mismo un gesto valioso. En concreto, el hilo conductor de las siguientes reflexiones será doble: por un lado, la invencible incertidumbre que en aquellos días caracterizaba la acción de los actores públicos —sistema político, administraciones, empresas, medios de comunicación— y de los agentes individuales; por otro, el inusitado incremento del caudal de sufrimiento no elaborado, el vacío por las muertes inesperadas y los planes de vida desbaratados. Afirmaré que entre estos dos elementos, incertidumbre y silenciamiento, y en esta circunstancia tan particular, vino a darse un cortocircuito que estaba cargado de implicaciones intensamente políticas. De un lado, por la consciente o inconsciente resistencia para dar cuenta —individual o colectivamente— de nuestra ignorancia sobre la mejor manera para afrontar la pandemia y atenuar el sufrimiento; de otro, por la voluntad, no tematizada, de ocultar esa misma dificultad, que se transformaba inmediatamente en causa de nuevo sufrimiento, un sufrimiento a todas luces evitable. En esta perversa conexión se encuentra, a mi juicio, el hecho político fundamental que se ha producido en este tiempo trágico.

Para explorar estas relaciones recurriré a un sencillo marco analítico que he tenido ocasión de desarrollar en un trabajo anterior y que, una vez más, me va a resultar útil para identificar las principales aristas de lo que aquí está en juego. En aquel trabajo, escrito con Rosana Triviño, diferenciábamos tres niveles —micro, meso y macro— en las dinámicas sociales de la ignorancia y el conocimiento, que luego asociábamos, en entornos específicos,

con distintas formas de injusticia epistémica.¹ Tanto en aquella ocasión como en ésta, el objetivo no es distinguir para clasificar, por mero prurito académico. Se trata, al contrario, de abrir brecha en la maraña de conexiones ideológicamente sesgadas que se dan entre los distintos niveles de discurso aquí implicados. En esta operación, la perspectiva de una epistemología comprometida debería poder mostrar un potencial crítico radicalmente democrático.²

Esta consideración metodológica me lleva a una última aclaración preliminar sobre el papel que puede jugar en este contexto la teoría y, en especial, la teoría política. No hay duda de que los problemas que arrastran nuestras democracias —en México, en la vieja Europa o en la nueva, o en el mundo— han tenido influencia en la manera en que se ha ido gestionando la crisis pandémica, en cómo se han administrado las emociones del público, o en cómo se han distribuido sus efectos y se han repartido las compensaciones. No podía haber sido de otra manera. Viceversa, es posible, y también probable, que la pandemia haya producido un efecto de aceleración sobre dinámicas degenerativas de la democracia que estaban ya en curso y que, en perspectiva, van a seguir vigentes. Pero mi impresión es que, en relación con estas situaciones, no hay nada original que la teoría de la democracia pueda decir, o no hay nada que no hubiera podido decir si la pandemia no se hubiera producido. Hay mucho qué hacer en el plano de la militancia, pero poco qué avanzar desde la teoría. Nuestra preocupación, entonces, está en otro lado, en particular, en saber qué es lo que la teoría (política) puede aportar para la comprensión de aquello que *en aquel preciso momento histórico* estaba presentándose a nuestra consideración y demostró ser rele-

¹ Greppi, A. y Triviño Caballero, R., “Injusticia epistémica e ignorancia institucional”, *Las Torres de Lucca: Revista Internacional de Filosofía Política*, vol. 10, núm. 19, 2021, pp. 15-28; en referencia a Fricker, M., *Epistemic Injustice*, Oxford, Oxford UP, 2009.

² Broncano, F., *Conocimiento expropiado. Epistemología política en una democracia radical*, Madrid, Akal, 2020.

vante *por causa de* la pandemia. En las próximas páginas, y antes de entrar en materia (apartados 5-7), quiero traer a la atención del lector un testimonio —uno entre tantos, por supuesto— que me permite ilustrar el clima y el tipo de experiencias que daban en aquellos días trágicos (apartado 2). Luego introduciré algunas acotaciones para delimitar el terreno en el que quiero situar el resto de mi comentario (apartados 3-4).

II

Según los datos de Eurostat, dos son las áreas geográficas en Europa donde, en la comparación entre los datos de 2019 y 2020, se ha producido el mayor descenso en la esperanza de vida: la Comunidad de Madrid, en España, y Lombardía, en Italia. Desconozco si hay explicaciones sólidas sobre por qué esto ha sido así. Pero no creo que nadie las tenga.

El primer muerto reconocido de Covid-19 en Europa se registró en Nembro, un próspero municipio de la provincia de Bérgamo, situado al pie de los valles alpinos y dedicado a los servicios y a la industria especializada. Aunque la analogía entre pandemia y guerra difícilmente se sostiene, el hecho es que, en aquel lugar y en aquel momento, la gente moría como en la guerra, o más. El periodista Gigi Riva ha recogido los datos y son elocuentes: frente a 128 vecinos caídos a lo largo de los cuatro años de la Gran Guerra, y a 98 en la Segunda, sólo en marzo de 2020 murieron 164 personas.³ Una foto, tomada a pocos kilómetros de allí, dio la vuelta al mundo. En ella puede verse una fila interminable de camiones militares aparcados en una ordenada avenida de periferia, donde aparentemente todo estaba igual que siempre. La noticia consistía en lo que la imagen no podía mostrar: esos camiones iban cargados de ataúdes que los servicios

³ Riva, G., *Il più crudele dei mesi. Storia di 188 vite*, Milán, Mondadori, 2022, p. 8.

funerarios no conseguían depositar en sus tumbas. Entre ellos estaban también los que provenían de Nembro.

Riva documenta con nombres y apellidos la intrahistoria de lo sucedido en aquellos días. En la tarde del 23 de febrero, ni los pacientes ni los familiares que se encontraban en el hospital comarcal de Alzano Lombardo, el centro de referencia para Nembro, entendían lo que estaba pasando. Por supuesto, tenían noticia de la epidemia que había en China y de los primeros casos aparecidos en la provincia de Lodi, a unos 60 km de allí. Pero esa información les resultaba demasiado lejana. Prevalecía la confianza, el sano sentido común. En el fondo, la nueva emergencia no era muy distinta a cualquier otra de las anteriores. Era, si vale el oxímoron, una “emergencia normal”. No había elementos para pensar que los acontecimientos pudieran irse de las manos.

Describe Riva:

La ignorancia sobre la difusión, las consecuencias y los remedios dejaba a la gente en un estado de desorientación que oscilaba entre la inquietud por lo desconocido y el hábito de confianza acrítica hacia un progreso científico que siempre había encontrado remedios para los peores males, alimentando el espejismo, si no de la inmortalidad, sí al menos de una vida cada vez más larga.⁴

Nadie sabía exactamente de qué había que defenderse ni con qué medios. Con ese ánimo, aquella tarde los enfermos se despidieron de sus familiares hasta el día siguiente. Se fueron a casa con la cabeza puesta en las complicaciones domésticas o en cómo cambiar las reservas de un viaje a la playa que no iba a producirse nunca.

Es verdad que, en materias tan delicadas como éstas, el punto de vista de la gente corriente cuenta poco. Otras perspectivas son más relevantes e influyentes. Lo es, y mucho, la del personal sanitario. Pero sigue siendo una perspectiva parcial: por ejemplo, porque el médico que tiene a un paciente en sus manos no

⁴ *Ibidem*, p. 17.

atiende a las razones del epidemiólogo. Esa misma mañana, al director médico del hospital de Alzano le había sido comunicada la aparición de dos casos positivos confirmados. Ninguno de ellos había tenido contacto con nada o nadie que proviniera directamente de China. Eso le llevó a tomar la determinación de cerrar los servicios de urgencias que estaban a su cargo y desalojar tanto a los enfermos como al personal sanitario. Todos volvieron a sus casas llevándose consigo, igual que los parientes del día anterior, el virus. ¿Fue una decisión equivocada?

Entre tanto, más allá de los muros del hospital, la vida seguía su curso. De lo que más se hablaba en Bérgamo era del partido que el Atalanta, el equipo de fútbol local, iba a jugar en Champions League. Se comprende el clamor y el orgullo: nunca esa provincia había llegado tan alto. Así se explica que nadie impidiera que 40 000 bergamascos entusiasmados acudieran al estadio. Ya entonces habían surgido dudas sobre la conveniencia de suspender o no el acontecimiento, pero sólo más tarde se supo que 8000 de ellos regresaron a casa con síntomas y unos 3000 resultaron positivos en las pruebas. Me pregunto cuántas personas murieron en las casas y en los lugares de trabajo de los aficionados. Por supuesto, todavía no había trascendido que, ya desde noviembre, e incluso antes, en la bergamasca como en otras áreas —¿dónde? ¿desde cuándo?— se estaba registrando una insólita incidencia de neumonías inexplicables y con mal pronóstico. Un año malo y temprano para la gripe: pero ¿era gripe corriente o había algo más?

De nuevo, es demasiado fácil afirmar que fue un error cerrar el hospital o permitir la celebración del partido. Deberíamos preguntarnos más bien si, con la información disponible para cada uno de los actores involucrados, y en aquel clima, habría sido realmente posible mantener abiertos los centros de salud o clausurar los estadios. ¿A costa de provocar un estallido de alarma social? Y aumentar el malhumor: ¿Cómo suspender el fútbol cuando todo lo demás seguía en marcha? ¿Qué hubiera pasado si en la opinión corriente hubiera prevalecido el rechazo de las

severas medidas de confinamiento que estaban por llegar? ¿Alguien podía saber de antemano cuál iba a ser el seguimiento de las medidas sanitarias? ¿Y cómo forzar a los desobedientes?

Téngase en cuenta que en Italia no existían directrices legales claras que guiaran la actuación de instituciones y ciudadanos en estas materias. Aunque, si las hubiera habido, ¿qué valor práctico habrían tenido? ¿Es que acaso el legislador puede prever lo imprevisible? En los meses siguientes se comentó que existía un “Plan nacional de pandemias”, pero no había sido actualizado desde 2006. ¿De quién era la culpa? ¿De los políticos ignorantes o de los expertos irresponsables? ¿De qué manera y en qué momento exigir responsabilidades a unos y otros? Considérese además la disonancia fisiológica que esas situaciones produce, entre la lógica de la prevención y la lógica de la gestión emocional de la opinión pública. Políticos y expertos están en longitudes de onda distintas. Y, de ese modo, los márgenes para el oportunismo se amplían considerablemente. Riva recoge un lamentable mensaje en redes donde el alcalde de Bérgamo cuenta que ha salido a cenar a un restaurante con su mujer —un personaje televisivo de cierta fama— y exhorta a sus conciudadanos a seguir su ejemplo: había que apoyar la economía. Tras las excusas de rigor, a quien no se le haya escapado al menos una bobada en aquellos días, que tire la primera piedra.

Bastante más interesante es indagar en cómo se distribuye la información entre los distintos ámbitos específicos de decisión, esto es, qué cosa sabe cada uno de los agentes involucrados y con qué oportunidades cuenta para hacer uso de la información. ¿Tenían los Gobiernos centrales un conocimiento más profundo de la situación que los Gobiernos locales? Viceversa, ¿disponían las autoridades más lejanas y cualificadas información detallada de lo que estaba pasando sobre el terreno? Se ha sugerido que algunos organismos sanitarios internacionales manejaron en aquellos días información que no llegaba a los ciudadanos. Quizá sea cierto. Pero ¿la ocultaron conscientemente? ¿Fallaron las correas de transmisión? ¿De cuánta información disponían los decisores

situados en niveles intermedios, aquellos que por su proximidad y capacidad de maniobra tenían recursos para intervenir con inmediatez? En nuestro ejemplo, sabemos que la decisión de cerrar o no cerrar hospitales estaba poniendo en riesgo la vida de pacientes, familias y profesionales. ¿Diríamos que ésta es una decisión meramente técnica o una decisión que tiene implicaciones políticas? Hemos de suponer que los epidemiólogos disponen de criterios para conducirse en situaciones de tanta complejidad. Pero, en un caso como éste, ¿es posible manejar tales criterios en ausencia de estimaciones fiables sobre los recursos materiales y humanos disponibles, o cuando los datos sobre la transmisión de la enfermedad son incompletos? ¿Había aquella tarde en el hospital de Alzano alguna forma segura de resolver el dilema que se enfrentaba el director del hospital? Al revés, no parece aceptable que el decisor político excuse su responsabilidad apelando al carácter incompleto de la información, a la imprevisión de sus predecesores o la falta de colaboración de la población. Al político le toca decidir a pesar de todo, asumiendo que los márgenes de actuación son limitados, pues demasiado a menudo están condicionados por poderes opacos que se superponen a las instancias de decisión formal y que se alimentan, precisamente, de la impotencia y la incompetencia de los cuadros administrativos.

Así las cosas, a la ignorancia de los políticos en materias científicas se suma el condicionamiento que supone tener que mediar entre el asesoramiento de los expertos epidemiólogos y el asesoramiento de los gurúes de la comunicación pública, indispensables para que los representantes políticos puedan mantenerse a flote en la tormenta mediática. De hecho, es razonable pensar que a lo largo de estos meses la prioridad de la agenda política no ha estado, como se supone, en la gestión sanitaria, sino en el manejo de los estados de opinión. No es exagerado decir que la primera función de las mascarillas no fue la de detener al virus, sino la de responder al pánico, visualizando la emergencia, orientando la atención, mandando un mensaje motivador —un “empu-

joncito”, un *nudge*⁵ que reforzara la solidaridad en la desgracia, como si de un rito apotropaico se tratara, una danza de la lluvia. Y por supuesto, también, se trataba de evitar que se difundiera la imagen de impotencia, para que la gente no diera en pensar, en un trance como ese, que ni la ciencia ni la política, en realidad, disponían de respuestas ciertas ante lo que estaba sucediendo.

III

A partir de este relato, como antes se decía, la cuestión es saber dónde poner el foco: qué hay en esta historia que identifique la experiencia individual y colectiva durante los días y los meses de la pandemia, qué hay de singular en esta historia que la distinga de otras catástrofes, naturales o políticas, qué es lo que distingue el dolor causado por esta pandemia respecto de otros flagelos históricos de los que se tenga memoria.

La circunstancia fundamental que, a mi juicio, ha aflorado en este periodo —la más inesperada, la más dramática, la más desconcertante, porque desestabiliza las convenciones y las expectativas que damos por sentadas y que orientan los equilibrios sociales y políticos— es la condición de radical incertidumbre en la que vinieron a encontrarse facultativos, enfermos, personas especialmente vulnerables, familiares y responsables políticos. A dos años y medio de distancia, cuando la alarma por virus ha dejado de ser una prioridad, seguimos sin saber exactamente si se ha cerrado este capítulo, a quién le sigue afectando, con qué consecuencias, etc. Y aunque retrospectivamente hayamos podido reconstruir muchas de las decisiones tomadas, individual o colectivamente, el hecho es que tanto ahora como entonces el conocimiento sobre virus y epidemias, y sobre la mejor manera para darle respuesta con los medios y las energías disponibles es incompleto. Este reconocimiento —el reconocimiento de lo que

⁵ Thaler, R. y Sunstein, C., *Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness*, Londres, Yale UP, 2008.

no sabemos— es a mi entender decisivo para elaborar la experiencia de lo que nos ha pasado y de cómo pudo llegar a pasar lo que pasó.

La aceptación de la incompletitud del conocimiento, aunque pueda parecer extraño, no es ni tan frecuente ni tan pacífica como quizá debiera. Y no lo es porque con ella se introduce una carga de profundidad que amenaza un sobrentendido —la confianza en la capacidad de planificación de una política científicamente orientada— que tendemos a dar por bueno, casi por inercia, a pesar de que a menudo amenaza con volverse contra nosotros mismos. La saludable confianza en una política basada en la razón se torna en confianza ciega en el momento en que empezamos a sobrestimar sus capacidades y, en consecuencia, pasamos por alto la necesidad de identificar pautas razonables de actuación que puedan valer en situaciones de incertidumbre, en aquellos casos en que los riesgos se vuelven incalculables. Esto es, precisamente, lo que sucedió en tiempos de pandemia, cuando ni los más sabios epidemiólogos se atrevían a pronosticar la velocidad de difusión del virus, cómo mutaría, cuándo tardarían en llegar las vacunas y a partir de qué nivel de inmunización serían efectivas, cómo reaccionarían las distintas variantes en climas cálidos o en los meses de verano, qué impacto tendía el *shock* pandémico sobre las inversiones y los hábitos de consumo, y así sucesivamente. A pequeña escala, la situación era exactamente la misma, como hemos visto en la narración anterior: nadie podía hacerse una idea mínimamente precisa de cuántos sanitarios y cuántos pacientes se habrían contagiado aquella tarde en Alzano Lombardo si el hospital hubiese permanecido abierto, o qué hubiese sucedido si la administración hubiera intervenido desde el primer momento ofreciendo una respuesta a escala regional o incluso nacional, y así sucesivamente. No aceptar que estas cuestiones no tienen respuestas ciertas en el tiempo y en el lugar preciso en que se desarrolla la acción, cuando nos enfrentamos a la responsabilidad de decidir, es síntoma de analfabetismo político y científico.

En último término, el reconocimiento de la indeterminación de determinados problemas políticos está desafiando ese obstinado elitismo tecnocrático en el que nos refugiamos en tiempos de desorientación ideológica. Saber y poder, suele decirse, están estrechamente conectados. El poder —cualquier poder— necesita de recursos epistémicos fiables si es que aspira a reclamar (con éxito) la legitimidad que necesita. Viceversa, quien dispone de conocimiento tiene en sus manos un instrumento determinante para hacerse con el poder, tanto político, como económico o ideológico. Pero esto es así únicamente en tiempos normales. En condiciones de incertidumbre estructural, el saber de los más sabios no llega a proporcionar más que una legitimidad incompleta, defectuosa. Y, cuando esto sucede, cuando conforme al estado del arte los expertos ignoran qué es lo que va a suceder, o cuando se producen desacuerdos significativos entre ellos, o cuando se desconocen las consecuencias a largo plazo de las opciones disponibles, lo razonable es recurrir a procedimientos de decisión que sean, por así decir, *independientes de la verdad*, que puedan sostenerse incluso a pesar del déficit epistémico en el que el sistema político está obligado a operar.

IV

Segunda observación preliminar. El fallido reconocimiento de la ignorancia ha sido causa de mucho sufrimiento evitable. Viceversa, un sereno reconocimiento de la situación de incertidumbre en que nos encontrábamos habría permitido reconocer la importancia de ciertos recursos psicológicos y materiales, morales e institucionales que son indispensables para hacer frente al sufrimiento y para elaborarlo con el menor daño posible.

Si en estos días, de camino ya hacia la normalización de nuestra convivencia con el Covid-19, merece la pena volver a esta cuestión es porque la opinión pública —permítanme que no diferencie aquí entre esferas y realidades nacionales— sigue

teniendo serias dificultades para hacerse cargo de lo que en este punto estuvo en juego. Encerrada en un espejismo que bien puede ser calificado como “solucionista”:⁶ la creencia en que en las alturas de los gabinetes tecnocráticos existe alguien capaz de diseñar un dispositivo automático que permita establecer confinamientos, medidas de protección, el despliegue de operativos sanitarios, gestionar los recursos de orden público, de financiación de los sectores productivos, etc., sin que estas cuestiones tan fundamentales queden al albur de las masas ignorantes: recuérdese que fueron muchos los que creyeron sinceramente en la posibilidad de crear una aplicación móvil con la que se hiciera realidad el sueño del rastreo universal de los contagios. Hemos vivido los meses de pandemia bajo una capa de paternalismo solucionista que nada tenía de inocente y que, al contrario, ha sido perfectamente funcional al silenciamiento de la desigual distribución del riesgo y el sufrimiento. Se daba a entender que la confianza de la población en los hallazgos de ciencia y en la labor de los Gobiernos era esencial para lograr el seguimiento de las medidas sanitarias y para evitar estallidos de rabia o protestas violentas. El consenso de la gente corriente, teñido de acentos belicistas, fue presentado como un arma estratégica fundamental en la lucha contra el enemigo microscópico. Dicho de la forma más brutal, se nos hacía creer que el cierre de filas en torno a un consenso monolítico salvaría vidas. Pero lo que no se decía es que un consenso como ese estaba basado sobre premisas turbias, o no plenamente transparentes, que daban por bueno un reconocimiento selectivo de los costes y los efectos de la pandemia. Como antes se decía, la defensa acrítica de este consenso acabó produciendo sufrimiento nuevo, sufrimiento innecesario.

En este entorno perverso, el público se vio atrapado entre dos extremos igualmente insostenibles: en un bando, el negacionismo oscurantista —el virus viene de China, las vacunas no funcionan,

⁶ La expresión proviene de Morozov, E., *To Save Everything, Click Here. The Folly of Technological Solutionism*, Nueva York, PublicAffairs, 2013.

la enfermedad se cura con desinfectante, las vacunas producen esterilidad, etc.—; en el otro, la versión pandémica de lo que Jon Elster ha descrito como “hiperracionalismo”, esto es, una forma específica de irracionalidad que consiste en no reconocer los fracasos de la razón.⁷ Por un lado y por otro, quien sale perdiendo era una versión razonable del principio de limitación del conocimiento, un axioma que resulta perfectamente obvio para cualquier persona familiarizada con la práctica de la investigación científica, porque la ciencia no dispone de soluciones unívocas para todos los problemas, pero que sigue resultando impopular. Porque, aunque a algunos les parezca mentira, hay muchas cosas que los epidemiólogos y los técnicos saben, pero hay otras que, de momento, ellos ignoran y sobre las que, sin embargo, es necesario intervenir sin demora.

V

El primer nivel de análisis de la relación entre indeterminación y sufrimiento que quiero ilustrar se refiere a la experiencia del sujeto expuesto a acontecimientos tan dramáticos como los que sucedieron en Nembro, en marzo de 2020. En contextos de radical incertidumbre, la capacidad de acción racional del sujeto —su agencia— queda drásticamente comprometida tanto por la dificultad en el manejo de la información que le lleva, como por la complejidad que encuentra para dar sentido al relato de sus propias acciones. Tanto quienes han sufrido en primera persona la pandemia como quienes se han librado de ella saben de qué estoy hablando: cuando una estadística funesta desbarata nuestros planes, el cálculo de los costes y de los riesgos de cualquier decisión, hasta de las más intrascendentes, queda en suspenso.

⁷ Elster, J., *Solomonic Judgements. Studies in the Limitations of Rationality*, Reino Unido, Cambridge UP, 1989, p. 17; *cfr.* Gross, M. y McGoe, L., “Introduction”, en *id.*, *Routledge International Handbook of Ignorance Studies*, Oxford-Nueva York, Routledge, 2015, p. 1.

A propósito de esa condición dramática, como antes se decía, lo que aquí nos importa es únicamente aquello que la teoría de la democracia pueda decir al respecto. Partiendo de las clásicas consideraciones acerca de la ignorancia racional y los usos deliberados de la ignorancia no parece difícil explicar la sumisa aceptación de la retórica que en aquellos días se despachaba por doquier celebrando las virtudes de los pueblos y los gobernantes que dedicaban sus desvelos a combatir el enemigo microscópico. Simétricamente, resulta comprensible que en determinados nichos informativos prevaleciera esa misma actitud acrítica, haciendo que individuos y grupos minoritarios se aferraran a delirantes relatos alternativos. Y cuanto más delirantes fueran, mejor para todos: tanto para los patrocinadores de la conspiración, porque de ese modo estaban fidelizando a sus audiencias, como para los defensores del *mainstream* informativo, porque así les resultaba más fácil probar la ignorancia de sus adversarios. Lo que dice la teoría en un caso como éste es que, en circunstancias tan extraordinarias, dejarse manipular —no oponer resistencia al uso estratégico de la información— es la solución más lógica.

A este propósito, se habrá observado que la lucha contra la pandemia se libraba en dos campos de batalla diferentes y sólo tangencialmente coincidentes: el sanitario y el de las percepciones públicas. Tan importante como controlar el virus fue manejar la información que se ofrecía al público, con el objeto de prevenir sus respuestas. Había que equilibrar el impulso positivo que la alarma social despertaba, con la tendencia paralizante que seguramente hubiera producido la difusión de pronósticos funestos. Y el punto interesante, al respecto, es notar cómo durante semanas e incluso meses, el secreto mejor guardado, pero que estaba a la vista de todos, a poco que alguien quisiera apartar la cortina de humo, es que nadie —ni expertos, ni responsables políticos— sabía cómo iba a terminar esta historia y quién iba a pagar el precio. Pero lo último que se podía decir en voz alta, porque nadie lo quería escuchar, es que nadie sabía lo que se habría necesitado saber: que los que estaban al mando de la situación, en el fondo, también eran ignorantes.

Más recorrido tiene una segunda observación que nos lleva directamente al problema de cómo identificar el sufrimiento causado por la pandemia. No es frecuente observar que, por lo general, la ignorancia es un obstáculo, pero también, en otros, puede convertirse en recurso para la agencia. Me refiero a aquellas situaciones en que el reconocimiento de la condición falible de la autoridad epistémica o, en los términos que antes empleábamos, la disposición a tomar distancia frente a la irrazonable promesa del hiperracionalismo, nos refuerza ante la emergencia, nos ayuda a identificar la común exposición al riesgo y a obrar en consecuencia. En la ignorancia, como en el miedo, cooperar se vuelve razonable. Pero lo más interesante —para una teoría de la democracia— es observar cómo, situados en el umbral de la cooperación, no todos somos iguales. Algunos están en mejor posición para convivir con la incertidumbre y, en consecuencia, se muestran también más dispuestos a aceptar los riesgos de la cooperación. Otros, en cambio, son más vulnerables y eso hace más probable que tengan que acabar cargando con los costes de la no cooperación. Esta disparidad es fuente de injusticia cuando la disparidad de posiciones no es aleatoria —¿cuándo lo es?— sino que depende de factores estructurales: por ejemplo, porque unos individuos tienen un acceso más fácil a ciertos bienes —podríamos hablar aquí de “bienes relacionales”, como reconocimiento, atención, comprensión, amistad, solidaridad, confianza y autoconfianza—⁸ que seguramente no curan las infecciones, pero son indispensables para convivir con la ignorancia y hacer frente al sufrimiento. Quienes no tengan acceso a esos bienes, en cambio, carecerán del suelo necesario para sobrellevar las pérdidas, para asumir el confinamiento, para renunciar a oportunidades, etc. La diferencia entre ambas condiciones está teñida de implicaciones intensamente políticas.

⁸ Gheaus, A., “Personal Relationship Goods”, *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, editor Edward N. Zalta, 2018; disponible en: <https://plato.stanford.edu/entries/personal-relationship-goods/#ImplIssu> (consultado el 5-7-2022).

En esta perspectiva, nada ha sido más odioso que los discursos que en estos meses han ensalzado hasta la saciedad la entrega y el coraje de los servidores públicos, luchando, “todos a una”, contra el enemigo público. Lo que esa retórica estaba ocultando —invisibilizando deliberadamente; empujándonos a ignorar...— era el hecho de que no todos tenemos la misma clase de exposición al sufrimiento, porque no todos disponemos de los recursos psicológicos, pero también morales y políticos, necesarios para generar resiliencia. Y, en consecuencia, no todos tenemos las mismas perspectivas de cara a lo que suceda el día después. Es esta una forma particularmente odiosa de injusticia (epistémica), que nada tiene que ver con el hecho de ser ignorante. Tiene su origen, en cambio, en la ignorancia voluntaria de los más fuertes y consiste en el no querer ver la dificultad para elaborar la pérdida. Como consecuencia de esta forma sistemática de “metaceguera”,⁹ el sufrimiento de los más vulnerables queda selectivamente devaluado. Por ejemplo, los ancianos atemorizados, de los trabajadores precarios, de los inmigrantes sin acceso a las vacunas, de las personas solas confinadas, de los más frágiles psicológicamente, etc. Se alardeaba en los medios —¡pero es falso!— de que todos estábamos en el mismo barco, como si todas las experiencias pesaran igual, como si todas pudieran ser medidas por el mismo rasero, como si todos los duelos dejaran la misma cicatriz. La fingida solidaridad interclasista estaba escondiendo además el hecho de que la labor del cuidado no está repartida de manera equitativa, sino que recae sobre personas cuyo estatus —y cuyo sueldo!— ocupa los lugares más bajos de la escala social. Personas que, a su vez, no tienen red, no tienen quién las cuide.

VI

El segundo nivel de análisis se sitúa en el plano de las instituciones, donde también han aparecido formas de ignorancia sistemática

⁹ Medina, J., *The Epistemology of Resistance*, Oxford, Oxford UP, 2012.

que han escapado a la consideración pública. No me refiero aquí a que algunos (o muchos) políticos o facultativos puedan estar desinformados, o sean tan ignorantes (o tan sabios) como los ciudadanos de a pie. Me refiero, en cambio, a aquellas situaciones en las que es el sistema institucional en su conjunto el que está produciendo o contribuyendo a producir ignorancia. Esto puede suceder, por ejemplo, porque su actuación tenga un efecto deseducativo, como cuando el sistema se dirige a los ciudadanos tratándolos como menores de edad; pero también, y entonces el análisis se complica, cuando las instituciones generan un ecosistema comunicativo en el que la elaboración de experiencias conflictivas está abocada al fracaso. Igual que se decía en el caso anterior, también aquí nos enfrentamos a una forma de ignorancia deliberada que produce daños, daños evitables. Sufrimiento innecesario.

Dejemos de lado enseguida el debate sobre si las autoridades sanitarias —las instituciones internacionales, los Gobiernos y las administraciones, de un lado; las empresas privadas, de otro— acertaron a encontrar el balance más adecuado entre la salud de los ciudadanos, el respeto a su privacidad o las demandas de la economía, o si hicieron todo lo posible por repartir equitativamente entre ricos y pobres los costes sociales de la pandemia. Preguntémonos, en cambio, si el conjunto de las instituciones democráticas, además de producir y gestionar conocimiento, se cuidan de poner a los ciudadanos en las mejores condiciones para administrar lo que saben y lo que ignoran, acerca del virus o del entorno en el que se enfrenta a él, poniéndoles en condiciones de elaborar el sufrimiento. Mi impresión es que, en este sentido, la respuesta a la pandemia ha dejado mucho qué desear y ha hecho aflorar profundos desajustes en el entramado social de nuestras democracias.

De hecho, es particularmente llamativa la dificultad que las grandes mayorías sociales han encontrado a la hora de tomar conciencia y visibilizar el daño que la pandemia estaba produciendo. Los esfuerzos de Gobiernos y medios de comunicación han estado centrados en mantener el orden público y en antici-

par la alarma social ante la emergencia hospitalaria, para llegar tan pronto como fuera posible al día en que el Covid-19 dejara de ser noticia y la economía pudiera levantar cabeza. Sólo así se explica, por ejemplo, que la gigantesca cesión de recursos públicos a compañías farmacéuticas privadas para el desarrollo de vacunas haya sido asumida por la opinión pública internacional casi sin resistencia alguna. Los medios internacionales no han tardado ni un minuto en celebrar, con el bombo habitual, las inestimables virtudes de la competencia entre investigadores a sueldo de empresas privadas. Tanto celebraron, que se les agotó el espacio para mostrar la pérdida de soberanía y de transparencia que esa operación implicaba. Y así se cerró el debate. ¿Estamos seguros de que una acción pública coordinada hubiera sido por fuerza más lenta e ineficaz? ¿Llegaron a contemplarse seriamente las alternativas?

A este propósito, sería interesante indagar si un distinto balance entre la distribución social del saber y el no saber —una epistemología política diferente— no habría creado un entorno social en el que la elaboración del sufrimiento y el duelo hubiera resultado más rica en matices, más cercana y menos retórica. Y, por consiguiente, socialmente más eficaz. Aunque no es el caso de entrar aquí en detalles, porque es un problema teórico de largo alcance, en general, hay múltiples indicios de que el modelo burocrático de derivación de la autoridad epistémica entre políticos y expertos —el modelo convencional, de weberiana memoria, en el que los políticos marcan los objetivos de la acción pública y los técnicos, públicos o privados, se encargan de identificar los medios más eficientes— se encuentra en nuestros días desbordado por el incremento de los niveles de incertidumbre en la toma de decisiones, una circunstancia propia e inevitable de sociedades caracterizadas por poseer altísimos niveles de desarrollo tecnológico y complejidad informativa.¹⁰ La pandemia ha hecho

¹⁰ Greppi, A., “Practical Authority and Epistemic Authority: Comity, Expertise and Public Understanding”, *Jurisprudence*, núm. 11, 2020, pp. 437-455.

patente esta dificultad y ha mostrado cómo el enquistamiento de las formas burocráticas de la autoridad acaba produciendo o multiplicando el sufrimiento. La pandemia ha mostrado, en otras palabras, que los mecanismos cooperativos actuales de división del trabajo epistémico no están a la altura de las necesidades.

¿En qué sentido no están a la altura? O, mejor dicho, ¿para quién han fracasado? Por supuesto, nadie pone en duda de que las estructuras actuales de división del trabajo epistémico produjeron resultados valiosos, en el sentido de que alcanzaron, en un plazo de tiempo razonable, el objetivo más deseado: definámoslo, por ejemplo, como el logro de la inmunidad colectiva. Pero lo que interesa notar aquí —repito: desde el punto de vista de la teoría de la democracia— es que alcanzaron ese objetivo sin dar la más mínima muestra de querer acortar la brecha entre el saber de los expertos, incuestionado e incuestionable, y la ignorancia de los legos, relegados, de forma inapelable, a una posición de mera aceptación pasiva, como si nada relativo a la discusión sobre los fines de la acción pública fuera de su incumbencia, precisamente en tiempos de pandemia.¹¹ En el relato generalizado, la vacuna caería directamente desde las alturas, de un lugar en el que habitan un puñado de sabios y de héroes dotados de poderes extraordinarios. No hacía falta escuchar a nadie. Y esto, aunque no se repare en ello, ha tenido consecuencias políticas tangibles.

En efecto, cabe preguntarse si la existencia de recursos institucionales distribuidos capilarmente, que fueran capaces de penetrar —por decirlo en terminología habermasiana— en los meandros periféricos del sistema político, hubiera permitido articular una respuesta pública distinta; una respuesta que sacara provecho al conocimiento difuso entre todos y cada uno de los ciudadanos, no sobre las técnicas farmacéuticas —esto es obvio: ¡la duda ofende!—, sino sobre las necesidades y las prioridades, favoreciendo de ese modo el desarrollo de mecanismos más am-

¹¹ Anderson, E., “Democracy, Public Policy, and Lay Assessments of Scientific Testimony”, *Episteme*, núm. 2, 2011, pp. 144-164.

plios que la mera intervención sanitaria. En un entorno como ése se podría imaginar, por ejemplo, que entrara en el radar de las discusiones públicas la cuestión de la rentabilidad social de la ingente inversión realizada en estos meses en infraestructura farmacéutica y sanitaria, o en medidas de apoyo social, con vistas a generar en el futuro estándares más altos de salud pública. La hipótesis, en definitiva, es que una epistemología política menos rudimentaria habría introducido elementos reflexivos en el debate sobre la respuesta a la pandemia, y que este factor discursivo, en el largo plazo, habría contribuido a generar las condiciones que permiten a individuos y grupos atenuar el sufrimiento. En especial, de los individuos y los grupos más expuestos a quedar marcados por esta experiencia.

Podemos ser algo más explícitos sobre esta propuesta y sobre el tipo de daños que podrían haberse evitado. Me refiero a los efectos tangibles del proceso de privatización y descapitalización que han sufrido los sistemas de atención sanitaria pública, incluso en países que en otro tiempo apostaban mayoritariamente por ella.¹² Aunque no es lugar para entrar en las cifras, ni en los antecedentes de estas políticas, este es el caso tanto de la sanidad lombarda como de la sanidad madrileña, las regiones de Europa donde —como recordábamos al comienzo— más fuerte ha sido la caída en la esperanza de vida en los años de pandemia. Hemos constatado que una emergencia sanitaria como la que hemos conocido requiere inversiones de largo plazo —infraestructuras, formación de personal, educación a la población, prevención, etc.— que no han sido, ni van a ser nunca asumidas por el sector privado, por la sencilla razón de que, con criterios de empresa, no son rentables. Sobre esto no hay muchas dudas, al menos en el plano teórico. El problema es que, cuando se traslada este asunto al debate público, la discusión se enreda a medida que la calidad en la prestación de (algunos) servicios privados, los más deman-

¹² Sobre el defecto de legitimidad y representatividad de una administración privatizada, Cordelli, C., *The Privatized State*, Nueva Jersey, Princeton UP, 2020.

dados en situaciones de normalidad, se aleja de los estándares de calidad ofrecidos por una sanidad pública infradotada. Las posiciones de la población se polarizan y los intereses que subyacen a esta batalla se muestran en toda su crudeza. A causa de la ignorancia de muchos y en perjuicio de los más débiles, por supuesto.

La trampa está en dar por bueno un argumento preliminar, conforme al cual sería lícito poner en un mismo plano, y comparar los servicios de la sanidad pública con los de la privada. Mientras que los sistemas públicos asumen, por definición, la cartera completa de servicios esenciales y para la totalidad de la población; a los privados, en cambio, se les reconoce la potestad para quedarse exclusivamente con aquellos que, conforme a criterios de mercado, se maximiza la satisfacción de los clientes y, a largo plazo, los beneficios del negocio. Por supuesto, la prevención epidemiológica es una de esas materias que nunca será objeto de atención por las aseguradoras. Lo mismo sucede con la cobertura, siquiera mínima, de aquellas personas que no entran en su *target* de mercado. En condiciones tan desiguales, la apuesta por la sanidad privada desplaza hacia ella recursos materiales y simbólicos, pero aligera sólo marginalmente la carga de trabajo de la pública, con la consiguiente saturación y descapitalización. Que, en estas condiciones, la sanidad pública va a ofrecer una atención cada vez peor, es algo de lo que son perfectamente conscientes los administradores políticos. Sin embargo, cuentan con que, con los niveles de bienestar de que se disfruta en las sociedades más desarrolladas, el clima de opinión está fundamentalmente en manos de las élites, esto es, de aquellos sujetos que pueden costearse servicios privados y que, por tanto, no les reprocharán el declive de los servicios públicos. Los costes electorales de esta devaluación de lo público, derivados del malestar de quienes no tienen acceso a la sanidad privada, pueden compensarse, en parte, con la clásica retórica que halaga los oídos menos responsables —la propaganda de la baja de impuestos y la lucha contra el despilfarro, de la competencia que favorece al contribuyente, etc.— y, en parte, con un interesante ajuste en la imagen pública

de los administradores como cabezas visibles de un sistema experto de provisión de servicios sanitarios.

En efecto, ante los ojos de un público distraído o movilizado al calor de algún escándalo, los políticos que patrocinan la estrategia privatizadora pueden desentenderse de los males de una administración sanitaria que aparece a los ojos del público como despilfarradora e incapaz de hacer bien las cosas, que no tiene acceso a las técnicas más avanzadas y que no consigue atraer a los mejores profesionales. El argumento es puramente epistémico: si la privatización de lo público responde a este diagnóstico, porque lo privado funciona mejor, entonces el político que se desentiende de lo público estará haciendo bien su trabajo. Puede incluso presentarse abiertamente como alguien que es ignorante en materia de hospitales porque su único cometido es asignar recursos a quien sepa utilizarlos de la mejor manera posible. De este modo, la labor del gestor queda reducida —en nombre de la ignorancia— a la función de mera supervisión de un sistema privatizado o semiprivatizado que escapa a su control directo. Lo que no se dice es que, en estas condiciones, la supervisión es tan insustancial como improbable. Pero ¿quién vendrá a pedirle cuentas al ministro o al consejero de turno que la empresa contratista está incumpliendo las condiciones del contrato? ¿Quién podrá asegurarle que la compartimentación de competencias entre lo público y lo privado está trucada? Nadie. Salvo quizá en caso de pandemia, donde el juego revienta.

A la vista de semejante entramado de ignorancia, (falta de) responsabilidad y ocultación, se comprueba cuál es el precio de dar por buena una epistemología política tan deficiente como la que se ha estado empleando en las últimas décadas para respaldar las políticas privatizadoras y descapitalizadoras de lo público, cuando se afirmaba alegremente que el conocimiento del que depende la salud es un bien que se vende y se compra, como cualquier otro. La acrítica legitimación de estas soluciones, la renuncia a poner freno a este atajo argumental bien puede calificarse como populismo sanitario o, más propiamente, como populismo

epistémico. Porque tecnocracia y populismo siempre van de la mano. También en este caso militan en el mismo bando dando cancha a la aparición de liderazgos milagrosos —personales o empresariales— que, envueltos en la palabrería pseudocientífica del vendedor de seguros, juegan a polarizar la (des)esperanza.

Pero ¿hay alternativas? ¿Existen políticas sanitarias que no sean infantilizadoras, que no sucumban a la tentación de surfear las oleadas de emoción, cuando la necesidad aprieta y aparece el pánico? ¿Cabe imaginar una sociedad dispuesta a escuchar a sus representantes diciendo que, ante cuestiones extremadamente complejas, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista social, no hay soluciones mágicas? Mirando un poco más allá, ¿con qué instrumentos —y con qué ánimo— esperamos a que llegue la próxima pandemia? La experiencia de estos años no nos ha dejado, como era de esperar, una epistemología política novedosa que resuelva de un plumazo estas dificultades. Esta habría sido una coincidencia demasiado grande. No obstante, desde una perspectiva que es ya postpandémica, habituados a la convivencia (ya sólo relativamente) incruenta con el virus, cabe rescatar algunas experiencias prefiguradoras, que no son ni tan lejanas ni tan microscópicas, como para que no merezca la pena dejar constancia de ellas. Experiencias que no responden a un programa definido, pero sí muestran una manera diferente, más reflexiva, de distribuir el saber y de sacar partido a lo que no sabemos.

Sin afán de convertir la anécdota en categoría, considérese la espontánea formación de redes de apoyo mutuo entre ciudadanos que buscaron salida a los males de la pandemia, en espacios en los que las dificultades de los más vulnerables —los enfermos, los mayores, las personas solas— se cruzaron con la disponibilidad de tiempo y la demanda de afecto, de reconocimiento, de dignidad de quienes estaban en mejor situación, aunque igualmente expuestos a la amenaza potencial. Vino a estipularse así, implícitamente, lo que bien podríamos describir como el nuevo contrato social de aquellos ciudadanos que viven bajo condicio-

nes de emergencia o, más modestamente, como una cláusula adicional que enmienda el claudicante contrato social vigente en los tiempos normales. Este es el caso —por poner el ejemplo que tengo más a mano mientras escribo— de varios grupos de vecinos que, en los barrios de Madrid, se encontraron para recoger y distribuir por las casas medicinas y alimentos.¹³ O cuando desde las ventanas de la ciudad anónimos ciudadanos apostaron por compartir música en vivo con sus vecinos, para distraer el ánimo, para mostrar presencia. No eran acciones decorativas, o puramente simbólicas. Eran gestos que afloraban allí donde la impotencia de las agencias públicas se hace manifiesta.

Ante la ausencia de cauces que dieran sentido al desvalimiento, estas redes informales tomaron las calles y plazas que habían quedado desocupadas, se sustituyeron al tráfico confinado, creando ocasiones de interacción —e incluso de encuentro, sin saltarse las precauciones inmunitarias— en las que salían a la luz demandas candentes y reservas de solidaridad. El peso diario de convivir con la probabilidad estadística de enfermar y de perderlo todo resultaba probablemente un poco más llevadero. Más todavía, estas redes de proximidad —más o menos estables, o incluso absolutamente efímeras: el resultado no cambia— se convirtieron también en espacios significativos de representación política. Eran arenas en las que lo invisible de la pandemia se hacía visible, donde se materializaba el conocimiento difuso sobre maneras de hacer y de relacionarse que normalmente permanecen ocultas, pero que en aquel momento marcaban una diferencia significativa —moral y políticamente cargada— respecto de los discursos tecnocráticos convencionales sobre lo que hay que saber y lo que hay que hacer para el buen gobierno de nuestras sociedades. Esto nos lleva finalmente a plantear un problema teó-

¹³ Véanse algunas de estas historias en el documental titulado “Redes de cuidado”, emitido por RTVE el 22-06-2020; disponible en <https://www.rtve.es/play/videos/la-aventura-del-saber/aventura-del-saber-redes-cuidados/5604521/> (consultado el 2-7-2022).

rico crucial, que nada tiene que ver ya con la manida cuestión de cómo crear plataformas de participación directa —virtuales o semivirtuales— incrustadas en el *iter* de las decisiones administrativas. Me refiero a poder pensar de qué forma se articulan —o podrían articularse— los espacios intersticiales de socialización política, situados en la bisagra entre política y cultura, allí donde se gestionan nuestras creencias y nuestros saberes, en sociedades caracterizadas por un altísimo grado de distribución del trabajo epistémico: sociedades en las que nadie puede saberlo todo, en las que todos tenemos que confiar en lo que otros saben, y donde los cauces de comunicación entre las distintas áreas del conocimiento, más o menos especializado, tienen una estructura reticular, más horizontal que vertical, porque ya no quedan en la plaza pública sabios y expertos como los de antaño, que puedan ponerse inmediatamente por encima.

Las redes de apoyo mutuo que surgieron en pandemia son la prueba de que, desde la sociedad civil, por más desintegrada que se encuentre en tiempos de capitalismo salvaje, es posible hacer cosas que las instituciones no saben hacer por sí mismas; y que el conocimiento disperso y, en gran parte, experimental que circula por ellas resulta particularmente valioso cuando las instituciones políticas y científicas carecen de diagnósticos adecuados —de nuevo, una forma de ignorancia— sobre nuestras prioridades a la hora de afrontar el daño de la pandemia, o para que el olvido no resulte insoportable. Que es precisamente lo que sucedió, por ejemplo, en Bérgamo, cuando de la noche a la mañana se materializó una fila de camiones cargados de ataúdes; o en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, donde los ancianos morían encerrados en sus cuartos, en total desamparo, separados de sus familias, sin posibilidad de derivación a una red hospitalaria absolutamente desbordada, porque el sistema privatizado de residencias no había contemplado la posibilidad de que se diera una situación semejante.

VII

El tercer nivel de análisis se refiere a las estructuras sociales de fondo —los sobrentendidos, las convenciones, los presupuestos ideológicos— que determinan el reparto de sus costes sociales. Su cuestionamiento nos lleva a discutir las modalidades de producción del conocimiento que, en esta circunstancia particular, no ha producido herramientas adecuadas para que los ciudadanos pudieran hacer frente de la mejor manera posible a lo que les estaba sucediendo. En este sentido, y en paralelo a lo que hemos dicho en apartados anteriores, nos encontramos ante aspectos de nuestra cultura pública que podrían ser mejorados y que, en este trance, han sido causa de sufrimiento evitable.

El análisis corre aquí el riesgo de volverse demasiado abstracto. Me conformaré con señalar algunas declinaciones del ideal democrático que, a pesar de que han sido muy celebradas en el debate académico de estos últimos años, cuando se las enfrenta a una realidad como ésta, de la que nos estamos ocupando, se revelan francamente inconsistentes. Me refiero a las concepciones epistémicas de la democracia, aquéllas en las que la legitimidad de la autoridad democrática se vincula a su capacidad para promover la adopción de las decisiones correctas, las que están más próximas a la verdad de los hechos o de los principios. La tentación de enfocar desde esta perspectiva es grande, pero también el peligro: no en vano, lo que hemos dicho en apartados anteriores es que, en circunstancias como las que hemos vivido en tiempo de pandemia, no era infrecuente que nadie conociera con precisión, y la suficiente antelación, las decisiones correctas, basadas en datos y pronósticos confiables.

Este asunto suscita toda clase de dificultades y no es el caso de insistir ahora en ellas. Es suficiente notar que, en el caso que nos ocupa, los epistémicos reclamarán un fundamento objetivo para las políticas sanitarias, por ejemplo, cuando se trata de imponer el uso de mascarillas, de habilitar el acceso a locales públicos, de cerrar determinados sectores productivos, o las escuelas,

etc. Coherentemente con ello, afirmarán que, ante las razones más fuertes, que los expertos epidemiólogos o economistas sin duda conocen, las personas ignorantes no pueden más que callar. A esto se opondrán los partidarios del enfoque contrario, llamémosle doxástico, que se resiste a poner tan alto el listón de la legitimidad. Lo que harán estos últimos no será tanto discutir si son los expertos o los legos los que tienen mejores razones, como mostrar que una demanda de justificación basada en la corrección —cuando no, explícitamente, en la verdad misma— proyecta sobre todas y cada una de las decisiones de gubernamentales, o sobre todos y cada uno de los pronunciamientos del Poder Judicial, una carga que en condiciones de incertidumbre está destinada a quedar sistemáticamente pendiente y frustrada. Y añadirán que, cuando esto sucede, lo que se está produciendo en realidad es una inadecuada deferencia¹⁴ de la capacidad de juicio del ciudadano a la iluminada autoridad de su representante (por ejemplo, un juez constitucional) bajo la presunción (indemostrable) de que los representantes deciden mejor.

Naturalmente, la posición de quien reclama una legitimación diferente de las decisiones, que evite establecer un nexo con la verdad, queda vacía mientras no se estipule un significado más preciso para la expresión “epistemología democrática”. De forma rapidísima, porque no es posible entrar en detalles, “democrático” es el desafío que lanza Protágoras al Sócrates platónico. En un pasaje crucial del diálogo entre ambos, Protágoras se pregunta y le pregunta a su adversario “si existe o no una cosa de la que todos los ciudadanos deben tener parte, si es que va a haber una ciudad”. Su respuesta, ilustrada a través del mito de Epimeteo, es que existe un elemento igualitario que nos une a todos los miembros de la ciudad y que consiste en el hecho de participar de la virtud política, esto es, en términos contemporáneos, de poseer la independencia de juicio que se precisa para deliberar

¹⁴ Lafont, C., *Democracy without Shortcuts. A Participative Conception of Deliberative Democracy*, Oxford, Oxford UP, 2020.

sobre las materias que “han de abordarse por entero con justicia y sensatez” (párrs. 323-325). Como era de esperar, el Sócrates platónico no queda conforme con esta tesis, aunque no argumenta directamente en contra de ella, salvo para afirmar la unidad de la virtud de los mejores. Es en otro lugar, en el *Gorgias*, donde afirma que solamente la ciencia, que está lógicamente en manos de unos pocos filósofos, proporciona un conocimiento cierto sobre el correcto uso de la fuerza y el arte de mantener unida la ciudad (párr. 457a).

Estas son las dos opciones fundamentales que aquí están en juego, y lo que a mí me parece, y la pandemia ha confirmado con gran contundencia, es que la posición socrática resulta insostenible en sociedades como las nuestras. En las condiciones de incertidumbre extrema necesitamos estrategias que nos permitan convivir con la ignorancia, gestionándola razonablemente. Paradójicamente, el progreso de la ciencia y el incremento exponencial de la información acumulada disuelve la creencia en un destino enteramente programable. Cuanto más amplio es el horizonte de lo que sabemos, más difícil se vuelve tomar decisiones, midiendo la totalidad de factores que entran en juego. Por supuesto, en el ámbito de la investigación científica, como en el de la argumentación moral, la orientación a la verdad no deja de ser el criterio fundamental de corrección. Pero cuando se trata de tomar decisiones políticas, cuando las interferencias entre distintas esferas de acción se multiplican, como en pandemia, la apelación al conocimiento de los que más saben se vuelve imprecisa, aunque no sea más que porque nadie dispone de una balanza para evaluar el peso relativo de las mejores razones en cada uno de esos ámbitos. En concreto, a la hora de cerrar o no un hospital, de imponer o no imponer el uso de mascarillas, de confinar a la población entera, esto es, ante decisiones sobre las que no parece razonable proyectar la exigencia de un consenso universal que se materialice en tiempo útil para que quienes están tomando las decisiones, y quienes las obedecen, puedan hacerse cargo de ellas. Lo que sí podemos hacer en estos casos es recurrir a reglas

procedimentales, inspiradas en principios, estos sí universales: por ejemplo, la regla que impone escuchar la posición del otro, incluso del ignorante, y le atribuye una posibilidad efectiva de intervenir en la decisión o de exigir responsabilidades por ella.¹⁵ En la deliberación que se organiza en torno a esas pautas de acción, el saber disperso de las mayorías afectadas, por ignorantes que parezcan, valdrá tanto como el saber de los que más saben. Las aspiraciones de los enfoques epistémicos de la democracia deberían quedar, en consecuencia, severamente recortadas.

VIII

En la composición de este escrito he tenido en todo momento presente un episodio curioso del que no sabría decir con precisión si es ridículo o intrascendente. Me refiero al pequeño entremés protagonizado por un presidente latinoamericano que en pleno apogeo de la amenaza pandémica aprovechó una comparecencia pública para echar mano a la cartera y extraer de ella la estampita de una virgen que, según decía, era la mejor defensa contra el virus. Si he retenido esta imagen y la recupero ahora, al final de mi recorrido, es porque no quiero que esta reflexión sobre los efectos y los recursos de la ignorancia caiga en una descalificación maniquea de las estampitas. Sería trivial afirmar que aquellas declaraciones no fueron más que un recurso de un presidente ignorante para captar la benevolencia de un público proverbialmente dispuesto a la aquiescencia; o, alternatively, el recurso de un político ingenioso, y algo cínico, que juega con la ignorancia de sus conciudadanos para alcanzar sus objetivos. La alternativa a un gesto como ese no sería otro que ponerse en manos del frío y objetivo conocimiento de la Ciencia (con mayúsculas).

Porque considero que la frontera entre conocimiento políticamente relevante e ignorancia es mucho más porosa de lo que se suele pensar, he querido alejarme de una interpretación tan

¹⁵ Hampshire, S., *Justice is Conflict*, Nueva Jersey, Princeton UP, 2000.

categoría de ese episodio. Con ello no estoy buscando, ni de lejos, abrir las puertas al oscurantismo y la pseudociencia. Literalmente, un gesto como ese es impresentable. Pero el gesto contrario no lo es menos, ya que supone una actitud no menos irresponsable, en este caso, respecto de los errores de la ciencia. La realidad es que conocimiento e ignorancia, al menos cuando nos situamos en el escurridizo campo de las decisiones políticas, con sus constricciones y sus márgenes de indeterminación, no son términos contrarios ni mutuamente excluyentes. Deteniéndome en los tres niveles de análisis que he querido identificar —micro, meso y macro— he intentado ejemplificar cómo estos términos se cruzan y se enriquecen mutuamente, o se distancian y, cuando esto sucede, se generan situaciones de sufrimiento evitable. Comprender estas dinámicas es un buen punto de partida para explicar por qué, y en qué sentido, la democracia, aunque sea epistémicamente imperfecta, sigue siendo valiosa. Y así lo demuestra en su resistencia frente a toda forma de decisionismo, incluso en circunstancias extremadamente adversas, como son las que se dieron, precisamente, en tiempos de emergencia.¹⁶ Pero para justificar esta última afirmación sería necesario emprender un camino mucho más largo del que he podido recorrer en esta ocasión.

BIBLIOGRAFÍA

- ANDERSON, E., “Democracy, Public Policy, and Lay Assessments of Scientific Testimony”, *Episteme*, núm. 2, 2011.
- BRONCANO, F., *Conocimiento expropiado. Epistemología política en una democracia radical*, Madrid, Akal, 2020.
- CORDELLI, C., *The Privatized State*, Nueva Jersey, Princeton UP, 2020.

¹⁶ Me sugiere Carlos Thiebaut, quien amablemente ha leído este texto, que se podría tirar de este hilo acudiendo a Scarry, E., *Rule of Law, Misrule of Men*, Cambridge (MA), Boston Review Books, 2010. Aquí ya no hay espacio para ello.

- ELSTER, J., *Solomonic Judgements. Studies in the Limitations of Rationality*, Reino Unido, Cambridge UP, 1989.
- FRICKER, M., *Epistemic Injustice*, Oxford, Oxford UP, 2009.
- GHEAUS, A., “Personal Relationship Goods”, *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, editor Edward N. Zalta, 2018, disponible en: <https://plato.stanford.edu/entries/personal-relationship-goods/#ImplIssu> (consultado el 5-7-2022).
- GREPPI, A., “Practical Authority and Epistemic Authority: Comity, Expertise and Public Understanding”, *Jurisprudence*, núm. 11, 2020.
- GREPPI, A. y TRIVIÑO CABALLERO, R. “Injusticia epistémica e ignorancia institucional”, *Las Torres de Lucca: Revista Internacional de Filosofía Política*, vol. 10, núm. 19, 2021.
- GROSS, M. y MCGOEY, L., “Introduction”, en *id.*, *Routledge International Handbook of Ignorance Studies*, Oxford-Nueva York, Routledge, 2015.
- HAMPSHIRE, S., *Justice is Conflict*, Nueva Jersey, Princeton UP, 2000.
- LAFONT, C., *Democracy without Shortcuts. A Participative Conception of Deliberative Democracy*, Oxford, Oxford UP, 2020.
- MEDINA, J., *The Epistemology of Resistance*, Oxford, Oxford UP, 2012.
- MOROZOV, E., *To Save Everything, Click Here. The Folly of Technological Solutionism*, Nueva York, PublicAffairs, 2013.
- RIVA, G., *Il più crudele dei mesi. Storia di 188 vite*, Milán, Mondadori, 2022.
- SCARRY, E., *Rule of Law, Misrule of Men*, Cambridge (MA), Boston Review Books, 2010.
- THALER, R. y SUNSTEIN, C., *Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness*, Londres, Yale UP, 2008.